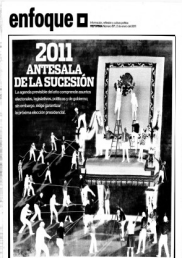
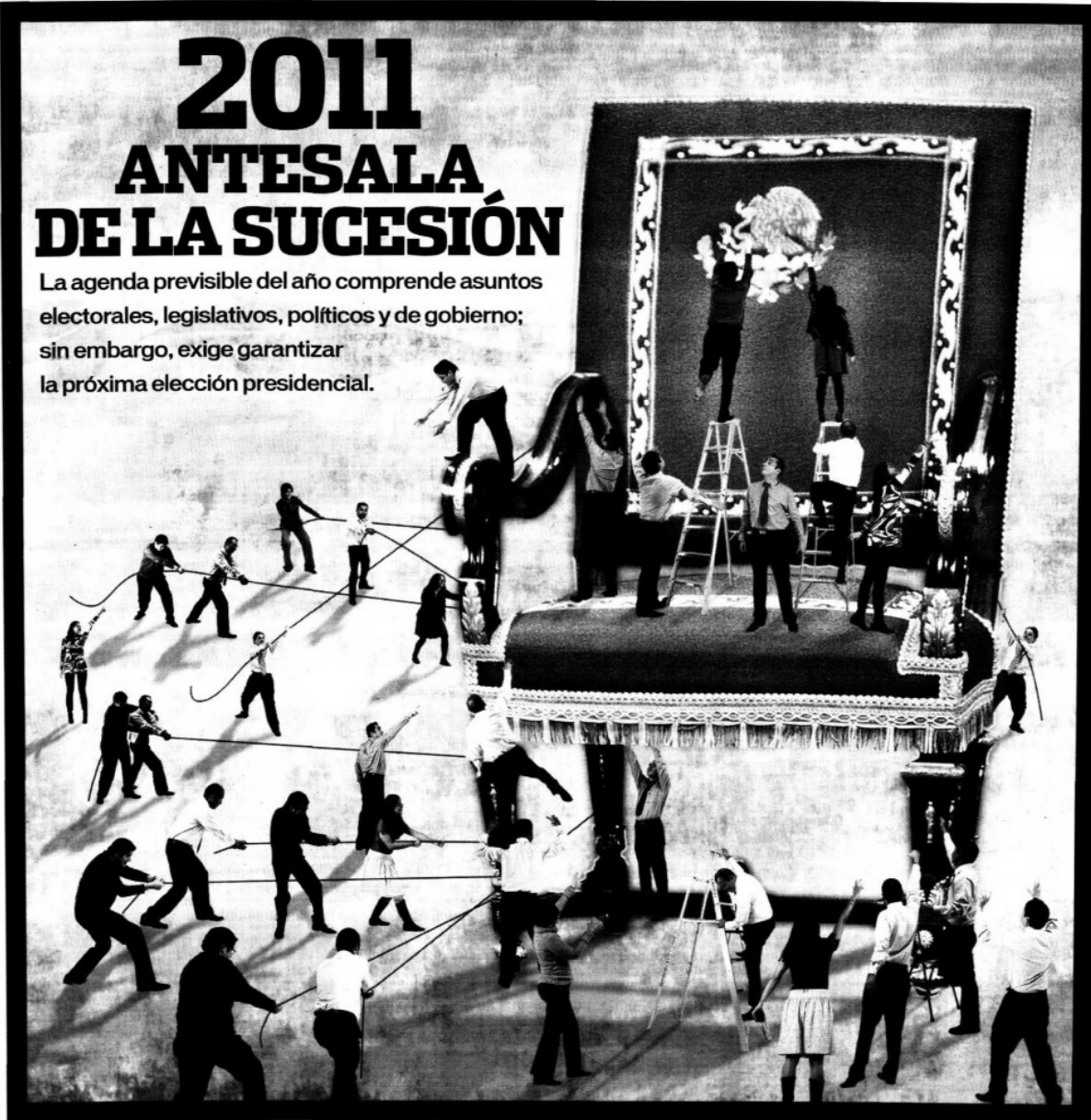


2011 ANTESALA DE LA SUCESIÓN

La agenda previsible del año comprende asuntos electorales, legislativos, políticos y de gobierno; sin embargo, exige garantizar la próxima elección presidencial.



Continúa en siguiente hoja

Página 1 de 5
\$ 144406.13
Tam: 2031 cm2
LAGUILAR

▣ 2011: la antesala

ARREGLAR LAS REGLAS

Gobernantes, dirigentes, legisladores, jueces, precandidatos y funcionarios, la élite política, deben empeñarse en arreglar las reglas de su entendimiento antes de ir a una nueva elección presidencial.

René Delgado

Atrás queda la idea de la alternancia como fórmula mágica y sencilla para encontrar la alternativa. La primera década del nuevo milenio la dejó hecha trizas. Ahora, está claro: da igual quien ocupe la Presidencia de la República, si no se desmonta el viejo régimen y se echan los cimientos del nuevo, la alternancia será un simple juego de turnos. El concursante ganador de la residencia de Los Pinos podrá exclamar con júbilo y sorna: ¡gané la elección, pero no el gobierno!

En ese trance, 2011 plantea –entre muchas otras– una interrogante fundamental: ¿cuál es el signo de esta nueva década: el de la reconstrucción o el del derrumbe nacional?

Construir garantías, desvanecer amenazas

Si este año la clase política mira caer las hojas del calendario de manera contemplativa, no habrá por qué asombrarse frente a la debacle en puerta. Si, por el contrario, las mira como un resquicio para darle garantías a la próxima elección presidencial, pero, sobre todo, al próximo gobierno –sin importar su filiación política–, es menester trabajar con celeridad. Doce meses son pocos para darle perspectiva al país.

De suyo complicada, diversa y nutrida, la agenda previsible exige a la clase política caminar de prisa pero con pies de plomo. Los pendientes en el ámbito legislativo, partidista, electoral y político

reclaman atención urgente y cuidadosa, pero no sólo eso. Reclaman operar en el plano inmediato sin perder de vista el horizonte; actuar sin renunciar a las aspiraciones políticas, pero tampoco a costa del interés nacional; y abandonar la patética filosofía de que la ruina del adversario es la fortuna propia.



La exigencia de actuar de ese modo deriva de un hecho simple: el país vive un momento de enorme fragilidad bajo la amenaza de cuatro factores que tienen contra la pared al Estado de derecho y socavan los endeble pilares de la democracia, entendida ésta en la amplitud de su término.

Uno. Los cárteles no criminales que aprovechan el desencuentro de la clase política y la debilidad de las instituciones para imponer, defender o expandir sus intereses y privilegios por encima del derecho y el bienestar nacional.

Dos. Los cárteles criminales que han diversificado su negocio y, por la vía del miedo o la legitimación de sus despropósitos, dan muestra de su grado de penetración en las estructuras sociales, políticas y económicas.

Tres. La violencia política, organizada y desorganizada, que frecuentemente genera chispas capaces de provocar un corto circuito de proporción considerable.

Cuatro. El estancamiento económico y el inmovilismo político que alimenta el decrecimiento

Continúa en siguiente hoja

Página 2 de 5

en las instituciones democráticas y el Estado de derecho. No se trata de recitar los indicadores que exhiben esa evidencia, se trata de llamar la atención sobre el azolvamiento de vías, canales e instituciones de participación civilizada efectiva. Se vive una profunda desesperanza.

Atempera esa circunstancia el despertar ciudadano que, por momentos, pareciera regresar por sus fueros, apadrinando algunas causas en materia de derechos humanos, educación, consumo, derechos políticos, justicia, transparencia, rendición de cuentas, defensa del espacio territorial, ambiental y radioeléctrico... Ese despertar registra algunas victorias, pero inquieta su insuficiencia así como el margen de tiempo, organización y maniobra ciudadana para reeducar y rehabilitar a la clase política, encontrando en ella apoyo, oído y atención.



La encrucijada de este 2011 tiene frente a sí dos urgentes asuntos que atender para poder adentrarse en la agenda política previsible.

Por un lado, la administración calderonista está obligada a contener y disminuir la violencia criminal y hacerse valer frente a los poderes fácticos que también vulneran el Estado de derecho. Por otro lado, los partidos están llamados a remontar su crisis interna: si no tienen capacidad para reconstituirse y asumirse como instrumento de la ciudadanía, difícilmente podrán reencarrilar a la democracia como forma de vida y gobierno.

La primera urgencia está directamente vinculada con la reposición del Estado de derecho. La segunda con la reconducción de la transición democrática.

Acotar a los cárteles, asegurar al Estado

El "Diálogo por la Seguridad" emprendido por la administración calderonista durante la segunda mitad del año pasado y limitado a escuchar a quienes se quiso oír, no supuso la rectificación sino la ratificación de la estrategia de combate al crimen prevaleciente. El diálogo pareció más bien un ejercicio de legitimación o, peor aún, una estratagema. Ni conclusión tuvo.

Fuese lo uno o lo otro, no surtió efecto. La violencia criminal recrudesció su intensidad y varió su carácter. Creció en su expresión y dejó de ser selectiva para, en algunos eventos, adquirir un carácter generalizado y hacer de la población civil su víctima o rehén. Estos giros aceleraron la extenuación de la paciencia ciudadana y el agotamiento de los cuerpos militar y policial, colocando en un predicamento mayor al gobierno, al carecer de respaldo y fuerza.

La captura de renombrados capos del narcotráfico, la detención de un sinnúmero de presuntos criminales, la incautación de arsenales inmensos, el

decomiso de cargamentos de droga y la errada política de comunicación –que durante la primera mitad del sexenio hizo del combate al crimen la razón de ser de la administración– insertaron la situación en una lógica de guerra, donde se ha terminado por confundir el fin con los medios. El objetivo no es llevar el inventario de las bajas y las derrotas asestadas al crimen, sino reconquistar el espacio ciudadano, reponer el Estado de derecho y garantizar la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.

En otras palabras, la captura o la muerte de capos no supuso el desmantelamiento de las organizaciones criminales ni la disminución de su actividad; el número de detenidos no guarda correlación con los sentenciados; la cantidad de muertos a consecuencia no justifica los términos del combate; la política de comunicación no convence y, pese a los esfuerzos, la administración ha sido incapaz de impulsar otros motivos de gobierno. Impunidad y negligencia estampan su sello en esa lógica de guerra.

En el año víspera de la elección presidencial, ese cuadro obliga a la administración a replantearse la estrategia bajo una triple óptica: reducir los índices de violencia, contener la actividad criminal y crear condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de aquel proceso electoral. No es cuestión de cambiar el calibre del armamento ni de jalar más veces el gatillo, menos aún, de restringir todavía más las libertades y sí, en cambio, es cuestión de mucha inteligencia y muy poco tiempo para lograr ese triple propósito: no va más allá de este mismo año.

Sin esas condiciones la elección presidencial del 2012 puede verse en peligro.



En la propaganda oficial, la vulneración del Estado de derecho se atribuye exclusivamente a los cárteles criminales. Empero, hay otros cárteles particularmente sindicales y empresariales que igualmente lo hacen.

Esos otros cárteles han hecho del chantaje una herramienta de trabajo. Aplican extorsiones o despliegan apoyos en aras de conservar o ampliar prebendas, privilegios, intereses o concesiones particulares. Ante ellos, la postura de la administración y los partidos políticos ha sido terriblemente equívoca: a veces dicen ser sus víctimas, a veces desdicen ser sus cómplices. Disfrazadas de alianzas político-electorales o de concursos para licitar servicios u obras, llegan a acuerdos bajo cuerda a partir del sacrificio de prioridades nacionales o del Estado de derecho.

Dada la fragilidad de las instituciones y el oportunismo de la clase política, esos cárteles sindicales, patronales e incluso eclesiales han impuesto o pretendido imponer sus intereses sobre los nacionales. Es censurable esa conducta de los poderes fácticos, pero es inaceptable que la administración

y los partidos participen de ese juego en virtud de la eventual recompensa electoral o política que se desprendan de su asociación con ellos.

En esto resulta curioso cómo la clase política se conduce ante esos eventuales socios: se hacen de la vista gorda, si la asociación los beneficia; les ponen la lupa, si los perjudica... pero el denominador común es el doblegamiento ante ellos.

Esa virtual subasta de principios para evitar la extorsión o lograr el apoyo ha vulnerado también el Estado de derecho y, de no acordar una rectificación por parte de los poderes formales frente a los poderes informales, las posibilidades del desarrollo nacional, económico y político, se seguirán esfumando.

Recuperar los partidos, reconducir la democracia

La reposición del Estado de derecho y la consolidación de la democracia dependen en mucho, obvio decirlo, de la recuperación misma de los partidos políticos.

Con mayor o menor intensidad, las tres principales fuerzas políticas viven o sobreviven luchas intestinas, abiertas o soterradas. Su unidad y su cohesión se han visto menguadas y, por consecuencia, las negociaciones entre ellas son tan inestables como inseguras. El acuerdo con una corriente interna de un partido no vale para otra y ello ha agrandado y fortalecido a figuras políticas que no necesariamente responden a los principios y las acciones institucionales de la organización a la que pertenecen o al gobierno que representan.

Así, gobernadores, caudillos, coordinadores parlamentarios, dirigentes políticos, políticos bisagra y caciques de toda laya han aumentado su peso individual o grupal, sangrando, debilitando o adelgazando la institución donde inscriben sus intereses. La falta de entendimiento y de acuerdo al interior de los propios partidos ha, por absurdo que parezca, desinstitucionalizado, desarticulado y privatizado aún más la política.

Los partidos como tales han perdido presencia, por más que hayan ganado ésta o aquella otra plaza. Ganan territorios y recursos vacíos de ciudadanía.

Este año, durante el primer trimestre, los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática renovarán sus dirigencias, mientras que Acción Nacional –ahora bajo la presidencia de Gustavo Madero– habrá de encarar el desafío de reintegrarse y reconstituirse como partido y atemperar los descalabros que, a lo largo de 10 años, le han provocado sus gobiernos. Si el panismo no resuelve ese dilema, su rol será menor en la próxima elección presidencial.



La señal que la cúpula tricolor priista envía en relación con el relevo de Beatriz Paredes en su dirigencia es triple: reitera la percepción no infundada que de sí tiene esa formación, como partido en vías de recuperación del poder; subraya que su candidatura presidencial –salvo que algo extraordinario ocu-

rra– está ya decidida, y ratifica sus viejos modos de hacer política. La palabra renovación no aparece en su diccionario político.

La recuperación de plazas estatales y municipales así como de curules federales y estatales fortalece, desde luego, la expectativa de regresar a la residencia oficial de Los Pinos. Sin embargo, los acuerdos que dan por sentado a Humberto Moreira en la oficina de Insurgentes Norte y los que impulsan la precandidatura presidencial de Enrique Peña comprometen, desde ya, el margen de maniobra del partido y de su eventual candidato. Se han hecho amarres políticos precisamente con los cárteles descritos líneas arriba y, sobra decirlo, anuda de antemano sus propias posibilidades.

El resumen de la señal priista es simple: vamos de nuevo, pero como antes. Hay condición, hay fuerza, hay ambición, hay candidato... nomás falta saber para qué quieren el poder. Si el priismo no le da contenido al discurso y rumbo a la intención política, probablemente termine en brazos de quienes en principio debería controlar.



El perredismo ha hecho de la crisis interna su hábitat natural; de la confusión entre movimiento y partido, su dinámica contradictoria; de las prerrogativas oficiales y de los recursos públicos extraoficiales, su dependencia; y del clientelismo, su tentación.

Cohabitan, es un decir, en ese partido dos formas de hacer política sin buscar el entendimiento ni decidir el rompimiento. Ni se suben a la montaña ni se suben a la banqueta, andan en la calle –en el doble sentido de la expresión– rebotando entre las guarniciones, respetando y no el reglamento de tránsito, adosados por la necesidad de contar con el registro electoral, la licencia para hacer política. Impulsan candidatos prestados o contratan apoyos a cambio de votos para conservar otros registros de emergencia.

Al menos en la capital de la República –su principal bastión político–, los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard han sabido encontrar la fórmula para mantenerse más cerca de la ciudadanía que el partido.

En la condición descrita, el perredismo renovará su dirigencia nacional y, en ese ejercicio, se juegan mucho más que eso. Probablemente se jugará su prevaencia como partido con vocación de poder o como partido de oposición profesional pero no leal, sus posibilidades en la elección presidencial y su destino, con lo que ello supone para un sector de la ciudadanía ansiosa por contar con una opción de izquierda, menos conflictiva y más efectiva.

Salir del turno, entrar en la alternativa

La agenda en sí de este año será intensa y en cada una de sus actividades marcará las estaciones de parada en la ruta con destino al 2012. La reseña de ella en esta edición de *Enfoque* da cuenta cabal de la diversidad

de asuntos legislativos, partidistas, electorales, gubernamentales y políticos previsible. No ocurre lo mismo, obviamente, con el cúmulo de eventos imprevisibles que, sin duda, provocará el crimen y que también serán determinantes del curso de los acontecimientos

Lo previsto y lo imprevisible exigen, como se ha dicho, actuar de prisa pero con pies de plomo, atendiendo lo urgente sin descuidar lo importante, mirando de cerca y de lejos.

Sería lamentable y peligroso que la década que arranca se perfile como la continuación de la primera de este siglo o milenio. El anhelo reclama un salto cualitativo para construir la alternativa que, hasta ahora, la alternancia por sí sola no asegura. Gran parte de los recursos políticos, económicos y ciudadanos que dieron tersura a la alternancia fueron despilfarrados, ultrajados o desperdiciados. Ahora, en un plazo muy corto, es menester acumular de nuevo ese capital para darle perspectiva al país.

Gobernantes, dirigentes, legisladores, jueces, precandidatos y funcionarios, la élite política, deben empeñarse en arreglar las reglas de su entendimiento; acotar al menos a los cárteles, criminales o no, que vulneran el Estado de derecho y socavan la democracia; fijar prioridades y políticas nacionales más allá del gobierno en turno; afinar y concretar las reformas para replantear el régimen; y garantizar, desde luego, la próxima elección presidencial como el margen de maniobra del próximo gobierno. Atender y acompañar el reclamo ciudadano

de recuperar el territorio del derecho y la democracia que todo Estado debe garantizar.

Sobra decirlo: sin reglas no hay arreglo y la disyuntiva -reconstrucción o derrumbe- exige una pronta respuesta. •

¿Qué se elige?

Siete estados van a las urnas en este año para elegir a 6 gobernadores, 116 diputados locales y 22 presidentes municipales.

ENTIDAD	G	DM	DRP	PM
Baja California Sur	1	16	5	5
Coahuila	1	16	9	0
Estado de México	1	0	0	0
Guerrero	1	0	0	0
Hidalgo	0	0	0	84
Michoacán	1	24	16	113
Nayarit	1	18	12	20
Total	6	74	42	222

G-gobernador, DM-diputados de mayoría, DRP-diputados de representación proporcional, PM-presidentes municipales.

